

INE/CG1552/2021

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SCM-RAP-94/2021

ANTECEDENTES

I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución. El veintidós de julio de dos mil veintiuno, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado **INE/CG1376/2021** y la Resolución **INE/CG1378/2021**, respecto de las irregularidades encontradas de la revisión de los informes de ingresos y gastos presentados por los partidos políticos y las coaliciones políticas locales, de las candidaturas a cargos de diputaciones locales y presidencias municipales correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Puebla.

II. Recurso de apelación. Inconforme con la sanción impuesta por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el dos de agosto de dos mil veintiuno, el partido **Pacto Social de Integración** presentó recurso de apelación para controvertir el Dictamen Consolidado y la Resolución antes mencionados, mismo que fue radicado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en la Ciudad de México (en adelante, Sala Regional) el seis de agosto de dos mil veintiuno, quedando registrado bajo el número de expediente **SCM-RAP-94/2021**.

III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, en sesión pública celebrada el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, la Sala Regional resolvió el medio de impugnación referido, determinando lo que a la letra se transcribe:

***ÚNICO.** Revocar parcialmente el Dictamen Consolidado y la Resolución impugnada, respecto de las conclusiones indicadas y para los efectos establecidos en el último apartado de esta sentencia.*

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-94/2021

IV. Derivado de lo anterior, en la ejecutoria antes citada se revocó parcialmente el Dictamen Consolidado y la Resolución impugnada, únicamente respecto del Considerando **29.11**, inciso **d)**, conclusiones **11.1_C4_PSI_PB** y **11.1_C5_PSI_PB**, del Resolutivo **DÉCIMO PRIMERO** de la citada Resolución, toda vez que a juicio de la Sala Regional, el Instituto Nacional Electoral impuso una sanción al partido, respecto a la primera conclusión mencionada, por la omisión de reportar espectaculares y propaganda en vía pública, detectada en monitoreo; sin que hubiere efectuado debidamente el procedimiento previsto en artículo 27 del Reglamento; por otra parte, por lo que hace a la segunda conclusión, por considerar que esta autoridad omitió pronunciarse sobre la idoneidad de la evidencia exhibida para acreditar el gasto respectivo, lo que constituye una indebida motivación y exhaustividad del Dictamen Consolidado, ya que en este, el Instituto Nacional Electoral se pronunció de forma genérica, en el sentido de que omitió presentar evidencias, lo que le imposibilitó a PSI conocer las razones por las cuales se determinó que la documentación y evidencias que presentó no eran las indicadas o suficientes para acreditar los gastos de campaña que se le imputaron; por lo que lo procedente fue revocar parcialmente la resolución controvertida para que, por conducto de los órganos facultados para ello, repusiera el procedimiento y verificara que el gasto a que se hizo referencia en esta conclusión sí fue debidamente reportado y, de ser el caso, sea considerado para efectos de reducir el monto del rebase de gastos de campaña; por tal motivo, y de conformidad al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c), d), g) y o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de Acuerdo correspondiente.

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j), aa) y jj); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de los ingresos y egresos de los partidos políticos.

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-94/2021

2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso, el recurso de apelación identificado con el número de expediente **SCM-RAP-94/2021**.

3. Capacidad económica. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las condiciones socio económicas del ente infractor.

Ahora bien, debe considerarse que el partido político sujeto al procedimiento de fiscalización cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que, en su caso, se les imponga, toda vez que mediante el Acuerdo CG/AC-050-2020, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, se le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2021, el monto siguiente:

Partido político	Financiamiento público actividades ordinarias 2021
Pacto Social de Integración, Partido Político	\$5,315,665.31

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido, es importante mencionar el partido político infractor no cuenta con saldos pendientes por pagar, relativos a sanciones impuestas en diversos procedimientos administrativos sancionadores.

Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que los partidos políticos con financiamiento local y federal tienen la capacidad económica suficiente con la cual puedan hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles.

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-94/2021

En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido político. Por tanto, estará en la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean establecidas conforme a la normatividad electoral.

4. Que la Sala Regional resolvió revocar parcialmente el Dictamen Consolidado **INE/CG1376/2021** y la resolución **INE/CG1378/2021** en los términos referidos en el citado fallo, por lo que, a fin de dar debido cumplimiento a la sentencia de mérito, se procederá a atender a cabalidad las bases establecidas en la ejecutoria precisada.

5. En este sentido, en el Considerando **CUARTO. Análisis de fondo; Estudio de agravios**, punto **2** y **3**, de la ejecutoria dictada en el recurso de apelación identificado con el número de expediente **SCM-RAP-94/2021**, la Sala Regional determinó lo que a continuación se transcribe:

“CUARTO. Análisis de fondo
● Estudio de agravios

(...)

2. Conclusión 11.1_C4_PSI_PB

a) Agravio

El Partido refiere que desconoce porque se le impuso una sanción de \$28,791.02 (veintiocho mil setecientos noventa y un pesos con dos centavos, moneda nacional).

Lo anterior, ya que en el anexo 3PB_PSI_BIS (1) del Dictamen Consolidado, solo hizo referencia a que se omitió reportar gastos de la candidatura común ID 244717 de Edgar Jesús Salomón Escorza, únicamente por el monto \$633.33 (seiscientos treinta y tres pesos con treinta y tres centavos, moneda nacional); de ahí que considera es desproporcional la sanción económica que se le impuso.

(...)

c) Análisis del agravio

*En consideración de esta Sala Regional el agravio es **fundado**, debido a lo siguiente:*

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-94/2021

En primer lugar, resulta necesario resaltar las consideraciones que sustentaron el procedimiento de fiscalización en el Dictamen y la resolución impugnada, que llevaron a la responsable a determinar la conclusión sancionatoria que se analiza.

(...)

*Ahora bien, del referido **anexo 3.5.1** que se citó en el oficio de errores y omisiones, se observa que contenía una tabla con un listado, el cual contiene doce hallazgos relacionados con el monitoreo de espectaculares y propaganda localizada en vía pública, los cuales fueron materia de la observación del citado oficio.*

En respuesta al oficio de errores y omisiones, el PSI señaló que desconocía los espectaculares ubicados en San Martín Texmelucan, debido a que en ellos se promocionaban la imagen de Graciela Figueroa García, persona que no fue su candidata a la presidencia municipal sino Edgar Jesús Salomón Escorza.

Por otra parte, respecto de los demás hallazgos precisó el número de pólizas con las que, a su consideración, había reportado el gasto.

(...)

*De igual forma, es preciso señalar que en el Dictamen Consolidado se indicó que, para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto obligado se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, de acuerdo a lo detalló en el **Anexo 3 PB_PSI_BIS**.*

*Ahora bien, de la revisión del **Anexo 3 PB_PSI_BIS**, se observa que se efectuó la cuantificación de diversos gastos de distintos partidos, conforme al artículo 27 del Reglamento; sin embargo, de su contenido no se aprecia que dichos gastos estén relacionados o correspondan con el monitoreo de espectaculares y propaganda en vía pública que se refería la conclusión en análisis, tal y como se advierte de lo siguiente:*

(...)

*Así, lo **fundado** del agravio radica en que, del Dictamen Consolidado y el **Anexo 3 PB_PSI_BIS**, no se aprecia de dónde derivó el monto de \$28,791.02 (veintiocho mil setecientos noventa y un pesos con dos centavos, moneda nacional) que se fijó como sanción a PSI.*

**CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-94/2021**

*Ello es así, porque el Dictamen Consolidado se limitó a señalar que para determinar dicha cantidad se realizaría el procedimiento conforme al artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, y que se detalló en el **Anexo 3 PB_PSI_BIS**; sin embargo, en este anexo, el único monto que se cuantificó como gasto erogado y no reportado por PSI fue por la cantidad de \$633.33 (seiscientos treinta y tres pesos con treinta y tres centavos), por un gasto de diversa índole.*

En esa tesitura, es evidente que la responsable impuso una sanción al partido, por la omisión de reportar espectaculares y propaganda en vía pública, detectada en monitoreo; sin que hubiere efectuado debidamente el procedimiento previsto en artículo 27 del Reglamento

(...)

Así, como se indicó de los anexos referidos en la conclusión que se analiza, no se advierte que la UTF haya efectuado el procedimiento antes citado.

Por el contrario, al establecer el monto de la sanción se basó en un anexo cuyo contenido no correspondía a los gastos materia de la conclusión; de ahí que la cantidad que se le impuso como sanción por un monto de \$28,791.02 (veintiocho mil setecientos noventa y un pesos con dos centavos, moneda nacional), no se encontró debidamente justificada, como lo precisa el actor; de ahí lo fundado del agravio.

Sin que pase inadvertido para esta Sala Regional, que el actor se trata de un partido político local, quien no cuenta con la misma infraestructura de un ente político nacional; por lo que, la comunicación con la autoridad fiscalizadora puede verse desfasada por ese hecho fáctico, circunstancia que podría considerarse, en un momento dado, como un elemento de valoración al verificar el reporte de gastos correspondiente.

3. Conclusión 11.1_C5_PSI_PB

a) Agravios

El Partido considera que, en tiempo y forma, a través del oficio 645/2021 del veinte de junio, en respuesta al oficio INE-UTF-DA-28159-2021 de errores y omisiones, presentó la comprobación fiscal de los videos publicitados en redes sociales del candidato Roberto Hernández Robles del municipio de Coronango, Puebla, con ID 103128, lo cual registró en el SIF.

Así, señala que no omitió reporte alguno, tal y como lo señaló la autoridad fiscalizadora.

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-94/2021

Señala que, es excesivo el costo determinado por la responsable de la elaboración de los videos, ya que no fueron de alta producción.

Indica que la aplicación de esa sanción afecta doblemente a su representado, porque al sumarla a su tope de campaña resultó rebasada, lo que deriva en una doble sanción por el mismo hecho.

(...)

c) Análisis de los agravios

*Son esencialmente **fundados**, los agravios que se analizan en este apartado, debido a lo siguiente:*

(...)

En el Anexo 3.5.10 que refiere el oficio de errores y omisiones, se insertó una tabla en el que se identificaron 16 (dieciséis) hallazgos relacionados con propaganda identificada en monitoreo de internet.

En respuesta al oficio de errores y omisiones, PSI señaló que la observación formulada ya había sido subsanada en el SIF, y que, para ello insertaba captura de pantalla de la evidencia respectiva, en la que precisó las pólizas con las que se relacionaban los gastos materia de la observación.

En el Dictamen Consolidado el INE indicó que algunas de los gatos que le había sido observados, habían quedado atendidos y otros no, conforme a lo siguiente:

(...)

*Conforme al Anexo **4 PB_PSI**, se advierte que los señalados con (2), en la columna de “Referencia; esto es, los gastos que no se tuvieron por atendidos son los siguientes:*

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-94/2021

ID	Municipio	Página Web	hallazgo	cantidad	Tipo de candidatura	Beneficiado
276449	Coronango	Facebook	Video publicitario (emergente)	1	Presidencia municipal	Roberto Hernández Robles
276450	Coronango	Facebook	Video publicitario (emergente)	1	Presidencia municipal	Roberto Hernández Robles
276451	Coronango	Facebook	Video publicitario (emergente)	1	Presidencia municipal	Roberto Hernández Robles
276452	Coronango	Facebook	Video publicitario (emergente)	1	Presidencia municipal	Roberto Hernández Robles
277196	Coronango	Facebook	Video publicitario (emergente)	1	Presidencia municipal	Roberto Hernández Robles
251173	Cuatlaningo	Facebook	Lonas para el evento (para tapar)	1	Presidencia municipal	Adán Pasten Sibaja

Asimismo, es preciso señalar que, en el Dictamen Consolidado, se estableció que **el sujeto obligado omitió reportar gastos detectados en el monitoreo de internet de tres videos publicitarios y una lona**; y, que para cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados, se utilizaría la metodología en términos del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización detalla en el **Anexo 4 PB_PSI_BIS**.

Así, del **Anexo 4 PB_PSI_BIS**, y conforme a la metodología citada, se arribó a la conclusión que los gastos no reportados ascendían a los siguientes montos:

ID Matriz	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario con IVA	Costo Total
VIDEO PUBLICITARIO	VIDEO PUBLICITARIO	SERV	<u>57</u>	23200	116,000
LONAS PARA EL EVENTO	CARPA	SERV	1	2320	2320

Lo **fundado** de estos agravios radica en que PSI, como lo sostiene en su demanda, al dar respuesta al oficio de errores y omisiones, destacó que sí había atendido la observación, en relación con el reporte de los videos publicitados en redes sociales del candidato Roberto Hernández Robles del municipio de Coronango, Puebla, lo cual registró en el SIF.

Al respecto, del escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones se advierte que el recurrente para atender la observación hizo alusión a que el gasto relacionado con los videos vinculados con la elección de la presidencia municipal de Coronango se reportó en "LA POLIZA No. 4/PERIODO DE OPERACIÓN 1/TIPO DE POLIZA NORMAL/SUBTIPO DE POLIZA INGRESOS/FACTURA No. 1296".

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-94/2021

Tal como lo indicó el actor, de una revisión del SIF, se advierte efectivamente que PSI en la póliza 4, reportó los siguientes gastos relacionados con los videos de la candidatura, materia de la sanción, conforme a lo siguiente:

(...)

De igual forma en el SIF, se advierte que PSI exhibió, como evidencias entre otras cosas, la factura 2088, cuyo concepto es por “Servicios de agencia de publicidad EDICIÓN DE VIDEOS PARA REDES SOCIALES ROBERTO HERNÁNDEZ CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE CORONANGO LOGO PSI.”, en la que se aprecia la cantidad y valor unitario de los servicios y el monto erogado.

De igual manera, se aprecia que exhibió la evidencia de los videos relacionados con esa póliza.

Por lo anterior, como lo señala PSI es posible advertir que existen diversos registros en el SIF de esas operaciones contables y registro de ciertas evidencias, sin que el INE se hubiera pronunciado sobre la idoneidad o no de las mismas para acreditar el gasto respectivo, lo que constituye una indebida motivación y exhaustividad del Dictamen Consolidado, pues se limitó a indicar que se había omitido cargar las evidencias para acreditar el registro de los gastos por concepto de la pinta de tres videos (sic), sin emitir ninguna razón del por qué las evidencias cargadas por el PSI no acreditaban el gasto o no eran las adecuadas para dar cumplimiento a los requerimientos exigidos en el Reglamento de Fiscalización.

De lo anterior, es posible advertir que como lo refirió PSI, en el SIF se hicieron los registros contables que señaló, en los que dicho partido cargó los documentos y evidencias con las que, a su consideración, se atendían las observaciones respectivas.

Por ello, esta Sala Regional considera que el INE omitió valorar esa documentación y evidencias cargadas, pues en el Dictamen Consolidado es posible advertir que el INE se pronunció de forma genérica, en el sentido de que omitió presentar evidencias, lo que le imposibilitó a PSI conocer las razones por las cuales se determinó que la documentación y evidencias que presentó no eran las indicadas o suficientes para acreditar los gastos de campaña que se le imputaron.

Finalmente, por cuanto hace a su agravio relativo a que no se debió computar para el rebase de topes de campaña del candidato Roberto Hernández Robles, por no haber reportado videos publicitarios, cuando contrario a lo señalado por la responsable sí lo realizó en tiempo y forma.

Es preciso señalar que, será en una nueva determinación en la que, en caso de advertir que la autoridad responsable verifique que el gasto a que se hizo referencia en esta conclusión sí fue debidamente reportado, deberá ser considerado para efectos de reducir el monto del rebase de gastos de campaña.

(...)"

6. Que, en coherencia al análisis desarrollado por el citado órgano jurisdiccional, dentro de la sentencia emitida en el expediente **SCM-RAP-94/2021**, mediante el Considerando **QUINTO. Efectos**, la Sala Regional determinó lo que a la letra se transcribe:

"QUINTO. Efectos.

Al resultar fundados los agravios precisados del recurrente, lo procedente es revocar parcialmente el Dictamen Consolidado y la Resolución impugnada, únicamente respecto de las sanciones impuestas en las conclusiones 11.1_C4_PSI_PB y 11.1_C5_PSI_PB.

Lo anterior para que a más tardar el treinta de septiembre emita nuevamente en la parte conducente el Dictamen y resolución en la que en forma exhaustiva, fundada y motivada, respecto de la conclusión 11.1_C4_PSI_PB, se pronuncie sobre el monto de la sanción respectiva; y, en cuanto a la diversa 11.1_C5_PSI_PB, si se actualiza o no la respectiva infracción, conforme a los parámetros analizados; y, de ser el caso, se pronuncie sobre la sanción que corresponda conforme al principio de proporcionalidad.

Lo anterior, en el entendido de que el nuevo Dictamen Consolidado y la Resolución correspondiente no puede impactar de mayor manera a PSI, que la resolución que acudió a impugnar en este juicio; así como la que en cumplimiento emitió la autoridad responsable mediante Acuerdo INE/CG1509/2021.

Hecho lo anterior, el INE deberá informar a esta Sala Regional dentro de las 24 (veinticuatro) horas de que ello suceda remitiendo la documentación que así lo acredite."

7. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional.

Ahora bien, de la lectura al medio de impugnación identificado con el número de expediente **SCM-RAP-94/2021**, se desprende que, con relación al **Considerando 29.11**, inciso **d)**, conclusiones **11.1_C4_PSI_PB** y **11.1_C5_PSI_PB**, de la

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-94/2021

Resolución **INE/CG1378/2021**, la Sala Regional, ordenó que esta autoridad emita una nueva determinación considerando el análisis expuesto, por lo que este Consejo General procederá a acatar la sentencia, para lo cual, en congruencia con el sentido de la ejecutoria de mérito, se realizará la siguiente modificación al Dictamen Consolidado y Resolución impugnada:

Conclusión 11.1_C4_PSI_PB	
Conclusión original 11.1_C4_PSI_PB	“El sujeto obligado omitió reportar gastos detectados en el monitoreo de propaganda colocada en la vía pública por un importe de \$28,791.02.”
Efectos	A más tardar el treinta de septiembre se emita nuevamente en la parte conducente el Dictamen y resolución en la que en forma exhaustiva, fundada y motivada, respecto de la conclusión 11.1_C4_PSI_PB, se pronuncie sobre el monto de la sanción respectiva.
Acatamiento	La Sala Regional resolvió revocar el Dictamen y la Resolución impugnada, respecto de la conclusión 11.1_C4_PSI_PB, correspondiente al Partido Pacto Social de Integración, Partido Político, toda vez que determinó que el INE impuso una sanción al partido por la omisión de reportar espectaculares y propaganda en vía pública, detectada en monitoreo; sin que hubiere efectuado debidamente el procedimiento previsto en artículo 27 del Reglamento; por lo que lo procedente fue revocar parcialmente la resolución controvertida para que, por conducto de los órganos facultados para ello, repusiera el procedimiento y verificara que el gasto a que se hizo referencia en esta conclusión sí fue debidamente reportado, y de ser el caso, sea considerado para efectos de reducir el monto del rebase de gastos de campaña. Una vez realizado lo anterior, el INE deberá emitir una nueva resolución, en el entendido de que el nuevo Dictamen Consolidado y la Resolución correspondiente no puede impactar de mayor manera a PSI, que la resolución que acudió a impugnar en este juicio; así como la que en cumplimiento emitió la autoridad responsable mediante Acuerdo INE/CG1509/2021.
Conclusión 11.1_C5_PSI_PB	
Conclusión original 11.1_C5_PSI_PB	“El sujeto obligado omitió reportar gastos detectados en el monitoreo en página de internet 3 videos publicitarios y 1 lona para tapar evento. \$118,320.00 .”
Efectos	A más tardar el treinta de septiembre se emita nuevamente en la parte conducente el Dictamen y resolución en la que en forma exhaustiva, fundada y motivada, respecto de la conclusión 11.1_C5_PSI_PB, se pronuncie si se actualiza o no la respectiva infracción, conforme a los parámetros analizados; y, de ser el caso, se pronuncie sobre la sanción que corresponda conforme al principio de proporcionalidad.
Acatamiento	La Sala Regional resolvió revocar el Dictamen y la Resolución impugnada, respecto de la conclusión 11.1_C5_PSI_PB, correspondiente al Partido Pacto Social de Integración, Partido Político, toda vez que se determinó que el INE omitió pronunciarse sobre la idoneidad de la evidencia exhibida para acreditar el gasto respectivo, lo que constituye una indebida motivación y exhaustividad del Dictamen Consolidado; por lo que lo

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-94/2021

Conclusión 11.1_C4_PSI_PB	
	procedente fue revocar parcialmente la resolución controvertida para que, por conducto de los órganos facultados para ello, repusiera el procedimiento y verificara que el gasto a que se hizo referencia en esta conclusión sí fue debidamente reportado, y de ser el caso, sea considerado para efectos de reducir el monto del rebase de gastos de campaña. Una vez realizado lo anterior, el INE deberá emitir una nueva resolución, en el entendido de que el nuevo Dictamen Consolidado y la Resolución correspondiente no puede impactar de mayor manera a PSI, que la resolución que acudió a impugnar en este juicio; así como la que en cumplimiento emitió la autoridad responsable mediante Acuerdo INE/CG1509/2021.

8. Modificación al Dictamen Consolidado INE/CG1376/2021.

Por lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Ciudad de México, este Consejo General modifica el Dictamen Consolidado respecto de las irregularidades encontradas de la revisión de los informes de ingresos y gastos presentados por los partidos políticos y las coaliciones políticas locales, de las candidaturas a cargos de diputaciones locales y presidencias municipales correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Puebla, identificado con el número **INE/CG1376/2021**, relativo a las conclusiones **11.1_C4_PSI_PB** y **11.1_C5_PSI_PB**, en los términos siguientes:

DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE CAMPAÑA PRESENTADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LAS COALICIONES POLÍTICAS LOCALES, DE LAS CANDIDATURAS A CARGOS DE DIPUTACIONES LOCALES Y PRESIDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE PUEBLA, DERIVADO DE LA SENTENCIA DE LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN EL EXPEDIENTE SCM-RAP-94/2021.

11.1 PACTO SOCIAL DE INTEGRACIÓN/PB

ID	Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/28158/2021 Fecha de notificación: 15 de junio de 2021	Respuesta Escrito Núm. PCPP/SARF-0019-2021 Fecha de respuesta: 20 de junio de 2021.	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
9	Monitoreo Monitoreo de Espectaculares y Propaganda en Vía Pública	“(…) En contestación al “monitoreo de	En acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional de Ciudad de México del Tribunal	11.1_C4_PSI_PB El sujeto obligado		

**CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-94/2021**

ID	Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/28158/2021 Fecha de notificación: 15 de junio de 2021	Respuesta Escrito Núm. PCPP/SARF-0019-2021 Fecha de respuesta: 20 de junio de 2021.	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
	<p>De la evidencia obtenida en el monitoreo realizado durante el periodo de campaña, se detectaron gastos de propaganda colocada en la vía pública que no se encuentran reportados en los informes correspondientes, como se detalla en el Anexo 3.5.1 del presente oficio.</p> <p>Se le solicita presentar en el SIF, lo siguiente:</p> <p>En caso de que los gastos hayan sido realizados por el sujeto obligado:</p> <ul style="list-style-type: none"> El o los comprobantes que amparen los gastos efectuados con todos los requisitos establecidos por la normativa. Las evidencias de los pagos y, en caso de que éstos hubiesen excedido lo equivalente a 90 UMA, las copias de los cheques correspondientes con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario" o de las transferencias bancarias. El o los contratos de arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de servicios, debidamente requisitados y firmados. Los avisos de contratación respectivos. Las hojas membretadas con la totalidad de los requisitos que establece la normativa. El informe pormenorizado de espectaculares. 	<p>espectaculares y propaganda en vía pública" con los numerales 9 y 10.</p> <p>Se hace referencia que este Instituto Político desconocía sobre la colocación de los espectaculares o lonas con las medidas que rebasan los 12 metros cuadrados, esto es en el Municipio de San Martín Texmelucan en específico en los lugares ubicados en:</p> <p>(...)"</p> <p>Anexo_R1_PSI_PB pág. 39</p>	<p>Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de impugnación SCM-RAP-94/2021, esta autoridad analizó de manera puntual lo expresado por el tribunal respecto de que en el Anexo 3_PB_PSI_BIS el único monto que se cuantificó como gasto erogado y no reportado por PSI fue por la cantidad de \$633.33 (seiscientos treinta y tres pesos con treinta y tres centavos); al respecto, esta autoridad efectuó una revisión puntual y exhaustiva de los registros presentados en el SIF y se detectó que de los testigos señalados con (1) en la columna "Referencia" del Anexo 3 PB_PSI del presente Dictamen, se constató que presentó su registro contable por concepto de propaganda colocada en vía pública con su respectiva documentación soporte con lo cual se pudo conciliar la información contable con lo detectado en el monitoreo; la observación en este punto quedó atendida. Sin efectos</p> <p>Respecto al registro señalado con (2) en la columna "Referencia" del Anexo 3 PB_PSI del presente Dictamen, se corrobora que el monto cuantificado no corresponde al concepto del gasto no reportado, por tal razón, la observación quedó sin efectos.</p>	reportó sus gastos detectados en el monitoreo de propaganda colocada en la vía pública.		

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-94/2021

	<p><i>En caso de que correspondan a aportaciones en especie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>El o los recibos de aportación con la totalidad de requisitos establecidos por la normativa.</i> • <i>Los contratos de donación o comodato debidamente requisitados y firmados.</i> • <i>El criterio de valuación utilizado.</i> • <i>La evidencia de la credencial para votar de los aportantes.</i> <p><i>En todos los casos:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>El registro del ingreso y gasto en su contabilidad.</i> • <i>En su caso, el o los informes de campaña con las correcciones respectivas.</i> • <i>La evidencia fotográfica de la publicidad colocada en la vía pública.</i> • <i>En caso de que la propaganda correspondiente a bardas, vallas y pantallas, la relación detallada.</i> • <i>Los permisos de autorización para la colocación de mantas con todos los requisitos que establece la normativa.</i> • <i>La o las identificaciones de las personas que autorizan la colocación de las mantas.</i> • <i>En su caso, la cédula de prorrateo correspondiente en donde se observe el registro y reconocimiento de los gastos que afecten a los candidatos beneficiados.</i> • <i>Las aclaraciones que a su derecho convengan.</i> 					
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

**CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-94/2021**

ID	Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/28158/2021 Fecha de notificación: 15 de junio de 2021	Respuesta Escrito Núm. PCPP/SARF-0019-2021 Fecha de respuesta: 20 de junio de 2021.	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
	Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la LGPP; 26, numeral 1, inciso a), 33, numeral 1, inciso j), 39, numeral 6, 46, numeral 1, 96, numeral 1, 105, 106, 107, 126, 127, 205, 207, 209, 210, 216, 218, 223, numeral 6, incisos b), h) e i), 245, 246, 247, 261, numeral 3, 261 Bis, 296 numeral 1, 319 y 320, del RF.					
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
11	<p>Monitoreo en páginas de internet</p> <p>Derivado del monitoreo en internet se observó la difusión de publicidad y propaganda que omitió reportar en los informes de campaña de los candidatos beneficiados, como se detalla en el Anexo 3 .5.10 del presente oficio.</p> <p>Se le solicita presentar en el SIF, lo siguiente: En caso de que los gastos hayan sido realizados por el sujeto obligado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El o los comprobantes que amparen los gastos efectuados con todos los requisitos establecidos en la normativa • Las evidencias del pago en caso de que éstos hubiesen excedido lo equivalente a 90 UMA, las copias de los cheques correspondientes con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario" o de las transferencias bancarias. • El o los contratos de arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de 	<p>(...)</p> <p>Con respecto a la observación número 11, ya se encuentra subsanada en el sistema Integral de Fiscalización. Se anexa evidencia con captura de pantalla.</p> <p>(...)"</p> <p><u>Anexo_R1_PSI_</u> <u>PB</u> pág. 49</p>	<p>Atendida.</p> <p>Del análisis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el sujeto obligado en el SIF, se determinó lo siguiente:</p> <p>En relación a los testigos señalados con (1) en la columna "Referencia" del Anexo 4 PB_PSI del presente Dictamen, se constató que presentó su registro contable por concepto de propaganda colocada en vía pública con su respectiva documentación soporte con lo cual se pudo conciliar la información contable con lo detectado en el monitoreo; la observación en este punto quedó atendida.</p> <p>No atendida</p> <p>Respecto a los registros señalados con (2) en la columna "Referencia" del Anexo 4 PB_PSI del presente Dictamen, el sujeto obligado no reportó dichos gastos en</p>	<p>11.1_C5_PSI_PB El sujeto obligado omitió reportar gastos</p>	Egreso no reporta do	

**CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-94/2021**

ID	Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/28158/2021 Fecha de notificación: 15 de junio de 2021	Respuesta Escrito Núm. PCPP/SARF-0019-2021 Fecha de respuesta: 20 de junio de 2021.	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
	<p>servicios, debidamente requisitados y firmados.</p> <ul style="list-style-type: none"> El o los avisos de contratación respectivos. <p>En caso de que correspondan a aportaciones en especie:</p> <ul style="list-style-type: none"> El o los recibos de aportación con la totalidad de requisitos establecidos en la normativa. El o los contratos de donación o comodato, debidamente requisitados y firmados. Dos cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por cada aportación realizada. Evidencia de la credencial para votar de los aportantes. <p>En caso de una transferencia en especie del comité:</p> <ul style="list-style-type: none"> El recibo interno correspondiente. <p>En todos los casos:</p> <ul style="list-style-type: none"> La relación detallada de la propaganda en Internet, debidamente requisitada. El registro del ingreso y gasto en su contabilidad. En su caso, el o los informes de campaña con las correcciones que procedan. Muestras y/o fotografías de la propaganda. Las aclaraciones que a su derecho convengan. <p>Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso n), 54, numeral 1, 61, numeral 1, inciso f), fracción III, 63, de la LGPP; 26, numeral 1, inciso a), 27, 33,</p>		<p>las contabilidades correspondientes del SIF; por tal razón, la observación no quedó atendida.</p> <p>En consecuencia, por lo que corresponde al gasto por gastos de propaganda colocada en la vía pública en el periodo de campaña, se determinó el costo correspondiente:</p> <p>Determinación del costo</p> <ul style="list-style-type: none"> Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto obligado se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF, como se describe a continuación: Se consideró información relacionada en los registros contables presentados a través del Sistema Integral de Fiscalización por los sujetos obligados. En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran ser comparables con los gastos no 	<p>detectados en el monitoreo en páginas de internet de 1 video publicitario o 1 lona para tapar evento, por un importe de \$25,520.00</p> <p>Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto obligado se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF. El procedimiento se detalla en el Anexo 4</p>		<p>Artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP y 127 del RF</p>

**CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-94/2021**

ID	Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/28158/2021 Fecha de notificación: 15 de junio de 2021	Respuesta Escrito Núm. PCPP/SARF-0019-2021 Fecha de respuesta: 20 de junio de 2021.	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
	numeral 1, inciso i), 37, 38, 46, 47, numeral 1, inciso a), 96, numeral 1, 105, 106, 107, numerales 1 y 3, 121, 126, 127, 215, 237, 243 y 245, del RF; en relación con el Acuerdo CF/001/2020.		<p>reportados.</p> <ul style="list-style-type: none"> Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar el valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o gastos no reportados por el sujeto obligado. En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos obligados no contenía un registro similar, se procedió a recabar información reportada por los proveedores en el RNP. De la matriz de precios que se presenta en el Anexo único, se determinó que las facturas presentadas por diversos proveedores eran las que más se ajustaban en términos de unidad de medida, ubicación y demás características, por lo que, se tomó como base para la determinación del costo. <p>Considerando dicha metodología, el costo correspondiente a la</p>	PB_PSI_BIS De conformidad con los artículos 243, numeral 2 de la LGIPE y 192 del RF, el costo determinado se acumulará a los gastos de campaña		

**CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-94/2021**

ID	Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/28158/2021 Fecha de notificación: 15 de junio de 2021	Respuesta Escrito Núm. PCPP/SARF-0019-2021 Fecha de respuesta: 20 de junio de 2021.	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
			<p>propaganda no reportada, se detalla en el Anexo 4 PB_PSI</p> <p>Los casos en comento se detallan en el Anexo único del presente Dictamen.</p> <p>Por lo tanto, se determinó que el sujeto obligado no reportó gastos por un importe de \$118,320.00</p> <p>De conformidad con los artículos 243, numeral 2, de la LGIPE; y 192 del RF, el costo determinado se acumulará a los gastos de campaña.</p> <p><i>En acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional de Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de impugnación SCM-RAP-94/2021, esta autoridad analizó de manera puntual lo expresado por el tribunal respecto de que se advierte que existen diversos registros en el SIF de esas operaciones contables y registro de ciertas evidencias, sin que por parte de esta autoridad hubiera habido pronunciación sobre la idoneidad o no de las mismas para acreditar el gasto respectivo; al respecto, esta autoridad efectuó una revisión puntual y exhaustiva de los registros presentados en el SIF y se detectó que de los testigos señalados</i></p>			

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-94/2021

ID	Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/28158/2021 Fecha de notificación: 15 de junio de 2021	Respuesta Escrito Núm. PCPP/SARF-0019-2021 Fecha de respuesta: 20 de junio de 2021.	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
			<p>con (1) en la columna "Referencia" del Anexo 4 PB_PSI del presente Dictamen, se constató que presentó su registro contable por concepto de propaganda detectada en el monitoreo de internet, con su respectiva documentación soporte con lo cual se pudo conciliar la información contable con lo detectado en el monitoreo; la observación en este punto quedó atendida.</p> <p>No atendida</p> <p>Respecto a los registros señalados con (2) en la columna "Referencia" del Anexo 4 PB_PSI del presente Dictamen, el sujeto obligado, se constató que el sujeto obligado no reportó dicho gasto en su contabilidad; por tal razón, la observación no quedó atendida.</p> <p>En consecuencia, por lo que corresponde al gasto de propaganda detectada en el monitoreo de internet en el periodo de campaña, se determinó el costo correspondiente:</p> <p>Determinación del costo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto obligado se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF, como se describe a continuación: 			

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-94/2021

ID	Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/28158/2021 Fecha de notificación: 15 de junio de 2021	Respuesta Escrito Núm. PCPP/SARF-0019-2021 Fecha de respuesta: 20 de junio de 2021.	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
			<ul style="list-style-type: none"> • Se consideró información relacionada en los registros contables presentados a través del Sistema Integral de Fiscalización por los sujetos obligados. • En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran ser comparables con los gastos no reportados. • Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar el valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o gastos no reportados por el sujeto obligado. • En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos obligados no contenía un registro similar, se procedió a recabar información reportada por los proveedores en el RNP. • De la matriz de precios que se presenta en el Anexo único, se determinó que las facturas presentadas por diversos proveedores eran las que más se ajustaban en términos de unidad de medida, ubicación y demás características, por lo que, se tomó como base 			

**CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-94/2021**

ID	Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/28158/2021 Fecha de notificación: 15 de junio de 2021	Respuesta Escrito Núm. PCPP/SARF-0019-2021 Fecha de respuesta: 20 de junio de 2021.	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
			<p>para la determinación del costo.</p> <p>Considerando dicha metodología, el costo correspondiente a la propaganda no reportada, se detalla en el Anexo 4 PB_PSI_BIS</p> <p>El caso en comento se detalla en el Anexo 4 PB_PSI_BIS del presente Dictamen.</p> <p>Por lo tanto, se determinó que el sujeto obligado no reportó gastos por un importe de \$25,520.00</p> <p>De conformidad con los artículos 243, numeral 2, de la LGIPE; y 192 del RF, el costo determinado se acumulará a los gastos de campaña.</p>			
18	Rebase de tope de gastos		<p>Rebase de tope de gastos</p> <p>En acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional de Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de impugnación SCM-RAP-94/2021 y derivado del análisis a las cifras reportadas por el sujeto obligado y derivado de los ajustes de auditoría, se determinó que el sujeto obligado rebasó el tope de gastos de campaña señalados en el Anexo 10_PB del presente Dictamen.</p> <p>El detalle de los gastos se reporta en el Anexo II A del presente Dictamen.</p>	<p>11.1_C10_PSI_PB</p> <p>El sujeto obligado excedió el tope de gastos del periodo de campaña; por un monto de \$508,967.93</p> <p>Por lo anterior se considera dar vista a la al Organismo Público</p>	Rebas e del tope de gastos de campaña	Artículo 443, numeral 1, inciso f) de la LGIPE.

**CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-94/2021**

ID	Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/28158/2021 Fecha de notificación: 15 de junio de 2021	Respuesta Escrito Núm. PCPP/SARF-0019-2021 Fecha de respuesta: 20 de junio de 2021.	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
				Local del estado de Puebla, para que en ejercicio de sus atribuciones determine lo conducente. Así como vista al Tribunal Local y a las Salas Superior y Regional correspondiente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación		
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)

9. Modificación a la Resolución INE/CG1378/2021.

En cumplimiento con lo mandatado por la Sala Regional, se procede a modificar la Resolución **INE/CG1378/2021**, respecto al considerando **29.11**, incisos **d)** y **g)**, conclusiones **11.1_C4_PSI_PB**, **11.1_C5_PSI_PB** y **11.1_C5_PSI_PB**, en los siguientes términos:

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE

INGRESOS Y GASTOS DE CAMPAÑA DE LAS CANDIDATURAS A LOS CARGOS DE DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE PUEBLA.

(...)

29.11 PACTO SOCIAL DE INTEGRACIÓN, PARTIDO POLÍTICO

(...)

De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las conclusiones ahí realizadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado son las siguientes:

(...)

d) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 11.1_C5_PSI_PB y 11.1_C9_PSI_PB. En atención al acatamiento de la sentencia SCM-RAP-94/2021, la conclusión **11.1_C4_PSI_PB, queda sin efectos**; subsistiendo las conclusiones **11.1_C5_PSI_PB y 11.1_C9_PSI_PB.**

(...)

g) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 11.1_C10_PSI_PB

(...)

A continuación, se desarrollan los apartados en comento:

(...)

d) El presente apartado considerativo, el cual consignaba la individualización e imposición de sanción correspondiente a tres conductas por egreso no reportado, queda sin efectos respecto a la conclusión 11.1_C4_PSI_PB derivado del cumplimiento a la sentencia SCM-RAP-94/2021; subsistiendo dos conductas por egreso no reportado, las cuales corresponden a las conclusiones 3_C5_PB y 3_C9_PB.

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-94/2021

En el capítulo de conclusiones de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias, mismas que vulneran los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. Conclusiones: **11.1_C5_PSI_PB** y **11.1_C9_PSI_PB**.

Conclusión
La sanción primigenia queda sin efectos derivado del cumplimiento a la sentencia SCM-RAP-94/2021.
11.1_C5_PSI_PB El sujeto obligado omitió reportar gastos detectados en el monitoreo en páginas de internet de 1 video publicitario y 1 lona para tapar evento, por un importe de \$25,520.00
(...)

De las faltas señaladas en el presente apartado, es pertinente señalar que se respetó la garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de diversas faltas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado¹ que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de mérito, se hizo del conocimiento del ente político a través del oficio de errores y omisiones técnicas, referido en el análisis de las conclusiones, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en el plazo establecido², contados a partir del día siguiente de dicha notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la

¹ En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que "... esta Sala Superior considera que los dictámenes consolidados sobre los ingresos y gastos [...], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse. Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen consolidado [...], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que correspondan, derivado de lo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable. En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución [...]."

² Conforme al Acuerdo INE/CG86/2021 emitido por el Consejo General de este Instituto Nacional Electoral, por el que fueron aprobados entre otros, los plazos para la fiscalización de los informes de ingresos y gastos correspondiente al periodo que ahora nos ocupa.

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-94/2021

documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar las observaciones realizadas.

Expuesto lo anterior y previo a la individualización de la sanción correspondiente, es importante determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de la conducta materia de análisis.

De conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y sus candidaturas, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de aplicación estricta.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.*

El Libro Tercero, “Rendición de Cuentas”, Título V “Informes”, con relación al Libro Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, establece que los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes siguientes:

- 1) Informes del gasto ordinario:
 - a) Informes trimestrales
 - b) Informe anual
 - c) Informes mensuales
- 2) Informes de Proceso Electoral:
 - a) Informes de precampaña
 - b) Informes de obtención de apoyo ciudadano
 - c) Informes de campaña**
- 3) Informes presupuestales:
 - a) Programa Anual de Trabajo
 - b) Informe de Avance Físico-Financiero
 - c) Informe de Situación Presupuestal

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-94/2021

En este tenor, con el nuevo modelo de fiscalización, es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada una de las personas que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda.

En el sistema electoral se puede observar que, a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendentes a conseguir ese objetivo.

Consecuentemente, al advertirse una obligación específica de los partidos políticos establecida en nuestro sistema electoral, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, a calificar las faltas cometidas, y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que correspondan, aún si la conducta no fue cometida directamente por un Partido Político, pues existe una obligación solidaria de este respecto de la conductas imputables al candidato.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso v) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae en los partidos políticos.

El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-94/2021

condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

El artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y, en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a las candidaturas, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a las y los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar que *los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña. Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la*

**CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-94/2021**

autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde debe cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 212 del Reglamento de Fiscalización. Sirve de apoyo a lo anterior, lo establecido en la Jurisprudencia 17/2010 **RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.**³

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del ente político no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que, esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó

³ Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia indicada tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-94/2021

ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al ente político pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado conductas que violentan los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará las faltas determinando lo siguiente:

- a)** Tipo de infracción (acción u omisión).
- b)** Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
- c)** Comisión intencional o culposa de la falta.
- d)** La trascendencia de las normas transgredidas.
- e)** Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f)** La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g)** La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-94/2021

Hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando denominado “**capacidad económica**” de la presente Resolución.

Debido a lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los elementos para calificar las faltas (**apartado A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**apartado B**).

A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).

Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito, mismas que se describen en el cuadro denominado **conductas infractoras** localizado en el siguiente inciso, las faltas corresponden a una **omisión**, atentando a lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.⁴

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.

Modo: El sujeto obligado con su omisión dio lugar a las siguientes conclusiones sancionatorias, mismas que vulneran los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. A continuación, se refieren las irregularidades observadas:

Conclusión
La sanción primigenia queda sin efectos derivado del cumplimiento a la sentencia SCM-RAP-94/2021.
11.1_C5_PSI_PB El sujeto obligado omitió reportar gastos detectados en el monitoreo en páginas de internet de 1 video publicitario y 1 lona para tapar evento, por un importe de \$25,520.00
(...)

⁴ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003.

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al ente político, surgieron en el marco de la revisión de los Informes de Campaña de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Puebla.

Lugar: Las irregularidades se cometieron en el estado de Puebla.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Previo al análisis de la normatividad transgredida es relevante señalar que los monitoreos de medios constituyen un mecanismo previsto en los Reglamentos aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que le permiten a la autoridad fiscalizadora verificar la veracidad de la información proporcionada por los sujetos obligados en sus informes; ya que se trata de un conjunto de actividades diseñadas para medir, analizar y procesar en forma continua, la información emitida por medios de comunicación electrónicos, impresos o alternos, respecto de un tema, lugar y tiempo determinados, con el registro y representación objetiva de los promocionales, anuncios, programas, entre otros, objeto del monitoreo; según señala la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-43/2006.

De igual manera, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en el SUP-RAP-86/2007 ha definido al monitoreo en materia de fiscalización como *una herramienta idónea para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y fiscalización de las actividades de los partidos políticos, encomendadas a las autoridades electorales, ya que a través de éstos se tiende a garantizar la equidad en la difusión de los actos proselitistas de los partidos políticos; medir los gastos de inversión en medios de comunicación de dichas entidades de interés público y apoyar la fiscalización de los institutos políticos para prevenir que se rebasen los topes de campaña, entre otros aspectos.*

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-94/2021

Bajo esta línea, surgió el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos como un instrumento de medición que permite a la autoridad fiscalizadora electoral recabar información y documentación soporte sobre inserciones en prensa y anuncios espectaculares colocados en la vía pública con la finalidad de cotejarlo con lo reportado por los sujetos obligados en sus Informes de Campaña, con el fin de verificar que todos los gastos realizados hayan sido debidamente registrados en su contabilidad y reportados en los Informes correspondientes.

Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar la realización de monitoreos en diarios, revistas y otros medios impresos, así como colocación de espectaculares y propaganda en la vía pública, se encuentra regulada en los artículos 318, 319 y 320 del Reglamento de Fiscalización.

Como puede apreciarse, el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos contribuye a la construcción de condiciones de credibilidad y confianza, al incorporar medidas novedosas para fiscalizar eficientemente el manejo administrativo y financiero de las campañas; ya que permite a la Unidad Técnica de Fiscalización cruzar la información a través de la detección de anuncios espectaculares colocados en la vía pública y de la búsqueda de información en medios impresos de circulación nacional y local, respecto de toda aquella publicidad y propaganda para cotejarlos con lo reportado por los sujetos obligados bajo este rubro; por lo que se configura como un mecanismo que permite cumplir cabalmente con el procedimiento de auditoría y verificar la aplicación de recursos para detectar oportunamente una posible omisión de gastos.

En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010, el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel. Por tanto, en casos como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga constar los resultados en medios electrónicos para considerarlos como pruebas con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos realizados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones.⁵

Es preciso mencionar que la *ratio essendis* de este criterio se encuentra recogido en la Jurisprudencia 24/2010, aprobada por la Sala Superior en la sesión pública celebrada el cuatro de agosto de dos mil diez, la cual señala que *los testigos de grabación, producidos por el Instituto Federal Electoral, constituyen pruebas*

⁵ Entenderlo de distinta manera, se traduciría en una actividad inocua, en tanto que los monitoreos carecerían de razón; según se enfatiza en la sentencia recaída al SUP-RAP 133/2012.

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-94/2021

técnicas que por regla tienen valor probatorio pleno, porque son obtenidos por el propio Instituto, al realizar el monitoreo, para verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión de promocionales en radio y televisión.

Por lo anterior, se colige que los resultados del monitoreo que dieron origen a las presentes faltas deben de ser evaluados como elementos con pleno valor probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no obra en la revisión de los informes de campaña prueba alguna en contrario que sirva para desvirtuar los resultados del monitoreo.

Previo al análisis de trascendencia de la normatividad transgredida, es relevante señalar que las visitas de verificación constituyen un mecanismo previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el Reglamento de Fiscalización, que le permite a la autoridad fiscalizadora verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad vigente respecto a la veracidad de lo reportado en los Informes de los Ingresos y Gastos que realicen los sujetos obligados en el periodo sujeto a revisión; pues se trata de una herramienta diseñada para contrastar y corroborar la información recabada por el personal designado por la Unidad Técnica de Fiscalización, para la realización de las verificaciones, con lo reportado por los sujetos obligados.

De igual manera, las visitas de verificación son una actividad eficaz de la autoridad fiscalizadora para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y vigilancia respecto de los informes de Campaña presentados, a efecto de cotejar que todos los gastos realizados hayan sido debidamente registrados en su contabilidad y reportados en los Informes correspondientes, garantizando así la certeza y transparencia en el origen, monto, destino y aplicación de los recursos.

Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar las visitas de verificación, así como modalidades y metodología, se encuentran reguladas del artículo 297 al 303 del Reglamento de Fiscalización.

Como se advierte, las visitas de verificación permiten a la Unidad Técnica de Fiscalización tener mayor certeza respecto al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en materia de financiamiento y gasto. Dicha facultad admite allegarse de información que pueda ser cotejada con la reportada por los sujetos obligados, contando así con un parámetro que pueda ser contrastado y genere una verificación integral y eficaz.

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-94/2021

En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010, el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel. Por tanto, en el caso como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga constar en actas de verificación los resultados de las visitas para considerarlos como pruebas con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos realizados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, por lo que entenderlo de distinta manera se traduciría en una actividad inocua perdiendo la razón de ser de dichos instrumentos.

Aunado a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 del Acuerdo de la Comisión de Fiscalización CF/019/2020, por el que se emiten, entre otros, los Lineamientos para realizar las visitas de verificación, durante las precampañas, apoyo ciudadano y campañas del Proceso Electoral Federal ordinario y locales concurrentes 2020-2021, las actas de verificación tendrán efectos vinculantes con la revisión de informe de campaña; asimismo los *resultados de las visitas de verificación serán determinados en el Dictamen y la resolución que en su momento proponga la Unidad Técnica a la Comisión, respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes, según sea el caso.*

Por lo anterior, se colige que los resultados de las visitas de verificación que dieron origen a las presentes faltas deben de ser evaluados como elementos con pleno valor probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no obra en la revisión de los informes en comento prueba alguna en contrario que sirva para desvirtuar los resultados de las actas de verificación.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse el cúmulo de faltas sustanciales por omitir reportar gastos realizados, se vulneran sustancialmente los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos.

Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito traen consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia electoral.

Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.

Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente⁶:

- Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio.
- Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
- Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado.
- La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que ofrecen;

6 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016.

**CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-94/2021**

cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.

- Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y comparable.

Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, valorará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.

Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.

En ese tenor, se considera que, para efectos de determinar el valor de un bien o servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación comprobatoria.

**CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-94/2021**

En las conclusiones que se analizan, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos⁷ y 127 del Reglamento de Fiscalización⁸.

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los

⁷ Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes: (...) b) Informes de Campaña: I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente (...)"

⁸ "Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento."

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-94/2021

instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por las conductas señaladas, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al sujeto obligado se traducen en diversas **faltas de resultado** que ocasionan un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, debido a que las infracciones en cuestión generan una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado cometió diversas irregularidades que se traducen en faltas de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulneran el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de las conductas a estudio.

Calificación de la falta.

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que las infracciones deben calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las

agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.⁹

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando denominado “**capacidad económica**” de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Conclusión 11.1 C5 PSI PB

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, debido a que la conducta infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.
- Que respecto a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar** de la conclusión objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) **CALIFICACIÓN DE LA FALTA**, en el cual se expuso el incumplimiento de la

⁹ Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-94/2021

obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de revisión.

- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad y el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral correspondiente.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$25,520.00 (veinticinco mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.)**.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.¹⁰

Así, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la **fracción III** consistente en una **reducción de la ministración** mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la

¹⁰ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-94/2021

sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado, se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al **100% (cien por ciento)** sobre el monto involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber **\$25,520.00 (veinticinco mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.)**, lo que da como resultado total la cantidad de **\$25,520.00 (veinticinco mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.)**.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al **Partido Pacto Social de Integración**, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$25,520.00 (veinticinco mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

(...)

g) En el capítulo de conclusiones de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a saber:

Conclusión
11.1_C10_PSI_PB El sujeto obligado excedió el tope de gastos del periodo de campaña; por un monto de \$508,967.93. Por lo anterior se considera dar vista a la al Organismo Público Local del estado de Puebla, para que en ejercicio de sus atribuciones determine lo conducente. Así como vista al Tribunal Local y a las Salas Superior y Regional correspondiente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-94/2021

De la falta señalada en el presente apartado, es pertinente señalar que se respetó la garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de diversas faltas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado¹¹ que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en la observación de mérito, se hizo del conocimiento del ente político a través del oficio de errores y omisiones técnicas referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en el plazo establecido¹², contados a partir del día siguiente de dicha notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad detectada; sin embargo, no presentó respuesta a las observaciones de la autoridad.

Expuesto lo anterior y previo a la individualización de la sanción correspondiente, es importante determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de la conducta materia de análisis.

De conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y sus candidaturas, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de aplicación estricta.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones,*

¹¹ En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que "...esta Sala Superior considera que los dictámenes consolidados sobre los ingresos y gastos [...], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse. Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen consolidado,[...], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que correspondan, derivado de lo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable. En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución [...]."

¹² Conforme al Acuerdo INE/CG86/2021 emitido por el Consejo General de este Instituto Nacional Electoral, por el que fueron aprobados entre otros, los plazos para la fiscalización de los informes de ingresos y gastos correspondiente al periodo que ahora nos ocupa.

clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.

El Libro Tercero, “Rendición de Cuentas”, Título V “Informes”, con relación al Libro Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, establece que los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes siguientes:

- 1) Informes del gasto ordinario:
 - a) Informes trimestrales
 - b) Informe anual
 - c) Informes mensuales
- 2) Informes de Proceso Electoral:
 - a) Informes de precampaña
 - b) Informes de obtención de apoyo ciudadano
 - c) Informes de campaña**
- 3) Informes presupuestales:
 - a) Programa Anual de Trabajo
 - b) Informe de Avance Físico-Financiero
 - c) Informe de Situación Presupuestal

En este tenor, con el nuevo modelo de fiscalización, es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada una de las personas que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda.

En el sistema electoral se puede observar que, a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendentes a conseguir ese objetivo.

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-94/2021

Consecuentemente, al advertirse una obligación específica de los partidos políticos establecida en nuestro sistema electoral, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, a calificar las faltas cometidas, y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que correspondan, aún si la conducta no fue cometida directamente por un Partido Político, pues existe una obligación solidaria de este respecto de la conductas imputables al candidato.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso v) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae en los partidos políticos.

El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

El artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y, en su caso, para subsanar las faltas

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-94/2021

señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a las candidaturas, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a las y los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar que *los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña. Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.*

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-94/2021

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde debe cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 212 del Reglamento de Fiscalización. Sirve de apoyo a lo anterior, lo establecido en la Jurisprudencia 17/2010 **RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.**¹³

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del ente político no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que, esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al ente político pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

¹³ Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia indicada tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará la falta determinando lo siguiente:

- a)** Tipo de infracción (acción u omisión)
- b)** Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
- c)** Comisión intencional o culposa de la falta
- d)** La trascendencia de las normas transgredidas
- e)** Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta
- f)** La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
- g)** La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia)

Hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción, considerando además, que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando denominado “**capacidad económica**” de la presente Resolución.

Debido a lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los elementos para calificar la falta (**apartado A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**apartado B**).

A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA

- a) Tipo de infracción (acción u omisión)**

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-94/2021

Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que se describe en el cuadro denominado **conducta infractora** localizado en el siguiente inciso, la falta corresponde a la acción¹⁴ de rebasar el tope de gastos establecido para el periodo de campaña, atentando a lo dispuesto en el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron

Modo: El sujeto obligado con su actuar dio lugar a la siguiente conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a saber:

Conducta infractora
11.1_C10_PSI_PB El sujeto obligado excedió el tope de gastos del periodo de campaña; por un monto de \$508,967.93. Por lo anterior se considera dar vista a la al Organismo Público Local del estado de Puebla, para que en ejercicio de sus atribuciones determine lo conducente. Así como vista al Tribunal Local y a las Salas Superior y Regional correspondiente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Tiempo: La irregularidad atribuida al ente político, surgió en el marco de la revisión de los Informes de Campaña de ingresos y gastos de los Partidos Políticos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Puebla.

Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Puebla.

c) Comisión intencional o culposa de la falta

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

¹⁴ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por exceder el tope de gastos establecido para el periodo de campaña, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad.

Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales¹⁵.

Ahora bien, cabe señalar que el artículo en mención dispone la necesidad de vigilar el debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; es decir, un sujeto obligado que recibe recursos adicionales a los expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la ley protege un principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su régimen de financiamiento.

Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, produciría esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma.

En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues

¹⁵ “**Artículo 443.** 1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: (...) f) Exceder los topes de gastos de campaña; (...)”

tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los postulados que formulen.

Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.

Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral.

Es importante señalar que, al exceder el tope de gastos establecido por la autoridad, el sujeto obligado vulneró de manera directa el principio de fiscalización que éstos están obligados a cumplir.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, siendo esta norma de gran trascendencia para la tutela del principio de legalidad.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación de las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta señalada, es el principio de legalidad con el que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto obligado se traduce en **una falta** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia)

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.¹⁶

¹⁶ Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando denominado “**capacidad económica**” de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

Conclusión 11.1 C10 PSI PB

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, debido a que la conducta infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.
- Que respecto a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar** de la conclusión objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) **CALIFICACIÓN DE LA FALTA**, en el cual se expuso el incumplimiento de la obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de revisión.

la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-94/2021

- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad y el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral correspondiente.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$508,967.93 (quinientos ocho mil novecientos sesenta y siete pesos 93/100 M.N.)**
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.¹⁷

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

¹⁷ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el período que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-94/2021

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al **100% (cien por ciento)** sobre el monto involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber **\$508,967.93 (quinientos ocho mil novecientos sesenta y siete pesos 93/100 M.N.)**, lo que da como resultado total la cantidad de **\$508,967.93 (quinientos ocho mil novecientos sesenta y siete pesos 93/100 M.N.)**.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al **Partido Pacto Social de Integración**, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto **Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes**, hasta alcanzar la cantidad de **\$508,967.93 (quinientos ocho mil novecientos sesenta y siete pesos 93/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

(...)

R E S U E L V E

(...)

DÉCIMO PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando **29.11** de la presente Resolución, se impone a **Pacto Social de Integración Partido Político**, la sanción siguiente:

(...)

d) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: **Conclusiones 11.1_C4_PSI_PB, 11.1_C5_PSI_PB y 11.1_C9_PSI_PB. En atención al acatamiento de la sentencia SCM-RAP-94/2021, la conclusión 11.1_C4_PSI_PB, queda sin efectos; subsistiendo las conclusiones 11.1_C5_PSI_PB y 11.1_C9_PSI_PB.**

Conclusión 11.1_C5_PSI_PB

**CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-94/2021**

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$25,520.00 (veinticinco mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.)**.

(...)

g) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión: 11.1_C10_PSI_PB

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$508,967.93 (quinientos ocho mil novecientos sesenta y siete pesos 93/100 M.N.)**.

(...)

10. Que la sanción originalmente impuesta a **Pacto Social de Integración Partido Político** en los incisos **d)** y **g)**, conclusiones **11.1_C4_PSI_PB**, **11.1_C5_PSI_PB** y **11.1_C10_PSI_PB**, del Considerando **29.11** de la Resolución **INE/CG1378/2021** Resolutivo **DÉCIMO PRIMERO**, quedó de la siguiente forma:

<i>Resolución INE/CG1378/2020</i>	<i>Acuerdo por el que se da cumplimiento al SCM-RAP-94/2021.</i>
Inciso d) Conclusión 11.1_C4_PSI_PB	Inciso d) Conclusión 11.1_C4_PSI_PB
"11.1_C4_PSI_PB El sujeto obligado omitió reportar gastos detectados en el monitoreo de propaganda colocada en la vía pública por un importe de \$28,791.02."	La sanción primigenia queda sin efectos derivado del cumplimiento a la sentencia SCM-RAP-94/2021.
Inciso d) Conclusión 11.1_C5_PSI_PB	Inciso d) Conclusión 11.1_C5_PSI_PB
"11.1_C5_PSI_PB El sujeto obligado omitió reportar gastos detectados en el monitoreo en página de internet 3 videos publicitarios y 1 lona para tapar evento. \$118,320.00."	"11.1_C5_PSI_PB El sujeto obligado omitió reportar gastos detectados en el monitoreo en páginas de internet de 1 video publicitario y 1 lona para tapar evento, por un importe de \$25,520.00 "
Inciso g) Conclusión 11.1_C10_PSI_PB	Inciso g) Conclusión 11.1_C10_PSI_PB
"11.1_C10_PSI_PB El sujeto obligado excedió el tope de gastos del periodo de campaña; por un monto de \$1,280,325.92. Por lo anterior se considera dar vista a la al Organismo Público Local del estado de Puebla, para que en ejercicio de sus atribuciones determine lo conducente. Así como vista al Tribunal Local y a las Salas Superior y Regional correspondiente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación."	"11.1_C10_PSI_PB El sujeto obligado excedió el tope de gastos del periodo de campaña; por un monto de \$508,967.93 . Por lo anterior se considera dar vista a la al Organismo Público Local del estado de Puebla, para que en ejercicio de sus atribuciones determine lo conducente. Así como vista al Tribunal Local y a las Salas Superior y Regional correspondiente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación"
<p>Nota: El monto señalado (\$1,280,325.92) fue modificado de conformidad con el Acuerdo INE/CG1509/2021, mediante el que se dio cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Regional Ciudad de México, dentro del expediente del juicio ciudadano SCM-JDC-1954/2021, quedando en un monto total de \$593,142.79.</p>	

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-94/2021

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

A C U E R D A

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado **INE/CG1376/2021** y de la Resolución **INE/CG1378/2021** aprobado en sesión extraordinaria celebrada el veintidós de julio de dos mil veintiuno, respecto de las irregularidades encontradas de la revisión de los informes de ingresos y gastos presentados por los partidos políticos y las coaliciones políticas locales, de las candidaturas a cargos de diputaciones locales y presidencias municipales correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Puebla, en los términos precisados en los Considerandos **8** y **9** del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo a **Pacto Social de Integración Partido Político** a través del Sistema Integral de Fiscalización.

TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral informe a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en Ciudad de México, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SCM-RAP-94/2021**.

CUARTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, notifique al Instituto Electoral del Estado de Puebla, para el efecto que proceda al cobro de la sanción impuesta a **Pacto Social de Integración Partido Político**, en términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas se harán efectivas a partir del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya causado estado; y los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas en la presente determinación, serán destinados organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, en los términos de las disposiciones aplicables.

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-94/2021

QUINTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 30 de septiembre de 2021, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**